



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	ALIMENTOS FINCA S.A.S.
DEMANDADO	Sergio Hernando Arciniegas Jiménez y otras.
PROCEDENCIA	Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín
CUDR	05001-31-03-013-2020-00073-01
RADICADO INTERNO	032-23
PROVIDENCIA	099-23
DECISIÓN	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del C. General del Proceso, “Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”. Los recursos de ley deben interponerse dentro de los términos establecidos por nuestro estado procesal, pues de lo contrario, los mismos se convierten en extemporáneos. INADMITE RECURSO DE APELACIÓN POR EXTEMPORÁNEO.

Procedente del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, arribó a esta Corporación el proceso de la referencia, con miras a desatar la apelación interpuesta por la codemandada Rubiela Porras Téllez contra el auto del treinta de agosto de 2022, dentro del proceso ejecutivo de FINCA S.A. frente a Sergio Hernando Arciniegas Jiménez, Rubiela Porras Téllez y Laura Juliet Alonso Porras, mediante el cual se negó la suspensión de los embargos y entrega de dineros.

Sin embargo, el referido recurso de apelación debe ser rechazado de plano, por las razones que pasan a explicarse:

ANTECEDENTES

1.- Precedentes fácticos. ALIMENTOS FINCA S.A.S. presentó demanda ejecutiva en contra de Sergio Hernando Arciniegas Jiménez, Rubiela Porras Téllez y Laura Juliet Alonso Porras, de manera que se librara mandamiento de pago por la suma de \$771.709.749, por concepto de capital contenido en el pagaré número 278, más intereses moratorios causados desde el cuatro de febrero de 2020 y hasta el pago total de la obligación, a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, el que libró orden de pago el cuatro de marzo de 2020, en los términos solicitados. Una vez integrado el contradictorio, profirió auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, el once de febrero de 2022, disponiendo el envío del expediente a los Juzgados de Ejecución Civiles del Circuito de Medellín, una vez se encontrara en firme la liquidación de costas.

2.- Trámite y decisión apelada. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, por proveído del 30 de agosto de 2022, avocó el conocimiento del asunto; y al mismo tiempo, respecto de la solicitud de la demandada Rubiela Torres Téllez, atinente a la suspensión de las medidas cautelares decretadas en este asunto, advirtió que la misma ya había sido resuelta por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, por lo que no era procedente la suspensión de los embargos ni la entrega de dineros, porque la aceptación al proceso de negociación de deudas de persona natural no comerciante, artículo 545 del C. General del Proceso, no consagra dicha suspensión, además, ya que tampoco allegó soporte alguno que hiciera procedente dicha petición.

3.- La apelación. Contra esta decisión, la apoderada de la ejecutada Torres Téllez interpuso recurso de reposición y subsidio de apelación, manifestando que la no suspensión de los embargos, está generando la imposibilidad de cumplir con los gastos de administración, incluso de alimentación propia y se su familia, situación que incluso tiene en estado grave la salud de su esposo.

Señaló que, la decisión del Juzgado viola claramente lo dispuesto en el artículo 545 del C. General del Proceso; además, está causando grave perjuicios irremediables a la deudora y sus acreedores, pues a la fecha adeuda IVA que no ha

podido ser cancelado, pues el juzgado se ha rehusado a suspender los embargos y entregas los dineros retenidos en razón a la cautela practicada.

Deprecó la revocatoria de la decisión emitida en auto del 30 de agosto de 2022, de manera que se proceda a ordenar la suspensión de los embargos y entrega de títulos de manera inmediata a la deudora.

Mediante providencia del 23 de marzo de 2023, el Despacho de Ejecución negó la reposición y concedió la alzada ante esta Corporación. Sostuvo que, al revisar el contenido del artículo 545 del C. General del Proceso, puede verificarse que no se consagra de modo alguno la pretendida suspensión o levantamiento de las medidas cautelares de embargo, así como tampoco entrega de dineros. Dijo que, ni siquiera resultaba necesaria una interpretación de tal norma, toda vez que esta es clara al establecer la suspensión de los procesos ejecutivos en curso, como se hizo dentro del presente caso.

CONSIDERACIONES

1.- Términos legales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del C. General del Proceso, *“Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”*. Se trata de los plazos que señalan numéricamente las normas de nuestro estado procesal, de manera que dentro de los mismos se realicen las diferentes actuaciones procesales, tanto por las partes como por los funcionarios.

En sentencia C-012 de 2002, la Corte Constitucional advirtió lo siguiente sobre los términos procesales:

Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia”. Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

Tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en

las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos procesales.

Respecto de la oportunidad para interponer el recurso de apelación, establece el artículo 322 del C. General del Proceso:

“...La apelación contra la providencia que se dicte por fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado...”

2.- Caso concreto. En el sub lite, la apoderada de la señora Rubiela Porras Téllez censuró vía reposición y apelación el auto proferido el 30 de agosto de 2022, a través del cual se negó la suspensión de los embargos decretados dentro del presente proceso ejecutivo, al igual que la entrega de dineros retenidos hasta el momento.

Ahora, de la revisión del expediente digital aportado puede evidenciarse que el 17 de marzo, 4 y 26 de abril de 2022, fue comunicado al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, la admisión del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante promovido por Rubiela Porras Téllez, de manera que procediera conforme al artículo 545 del C. General del Proceso.

Como el expediente había sido remitido a los Juzgado Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias, sin resolver tales comunicaciones, mediante sentencia de tutela del 13 de mayo de 2022, la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, ordenó su devolución al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, para que este se pronunciara dentro de su órbita y autonomía, frente a lo informado sobre el trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante.

Por esta razón, en proveído del 18 de mayo de 2022, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, entre otras, dispuso la suspensión del proceso respecto de la codemandada Rubiela Porras Téllez, a partir de la aceptación del trámite de insolvencia, esto es, 15 de marzo de 2022, hasta por 60 días. Del mismo modo, en relación con la suspensión de embargos dijo: “...*Frente al correo del 04*

de abril de 2022, previo a resolver sobre la suspensión de embargos pretendida por la señora Rubiela Porras, como quiera que no se anexo solicitud suscrita por la Notaria 08 de Bucaramanga, ni la misma se indicó en el escrito de aceptación de negociación de deudas, **ni dicha suspensión de embargos está consagrada en el artículo 545 del C.G.P.**, y además la audiencia se fijó para el pasado 12 de abril de los corrientes, desconociendo la suscrita el estado actual de dicho trámite; se ordenará por secretaría, oficiar a la Notaría en mención a efectos de que informen las actuaciones que allí se han adelantado...”

Ante una nueva solicitud de suspensión de la medida decretadas dentro del presente asunto, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, por auto del primero de junio de 2022, además de indicarle a la togada memorialista que no contaba con derecho postulación al interior de este procedimiento ejecutivo, le señaló que: “...Ahora bien, cabe acotar que, incluso al margen de lo expuesto, **la solicitud formulada ya fue motivo de pronunciamiento por parte de este Despacho por auto del pasado 18 de mayo, donde claramente se indicó la negativa de acceder a la suspensión de embargos, dado el alcance interpretativo dado al artículo 545 del CGP...** Adicionalmente, también se indicó que correspondía al Juzgado de Ejecución Circuito resolver tal cuestión, dado que los dineros a órdenes de este proceso se encuentran por cuenta de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución Civil del Circuito de Medellín. (Cfr. Archivo 58). **En ese orden, se remite a la solicitante al proveído en mención...**” (Negrilla intencional).

Luego, mediante escritos del 15, 19, 26 de julio y 17 de agosto de 2022, nuevamente se reiteró la petición de la expedición de oficios para el levantamiento de medidas cautelares y entrega de dineros embargados, los cuales fueron resueltos desfavorablemente por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, mediante auto del 30 de agosto de 2022, donde se advierte que “*las mismas ya han sido resueltas por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, por lo que el Despacho reitera que no es procedente la suspensión de embargos ni la entrega de dineros, toda vez que la aceptación al proceso de negociación de dudas de persona natural no comerciante, artículo 545 del Código General del Proceso, no consagra dicha suspensión, ni tampoco allega soporte alguno que haga procedentes dichas solicitudes...*”

Como puede observarse en la última actuación del Juzgado Trece Civil del

Circuito de Oralidad de Medellín, a pesar de haberse indicado la ausencia de derecho de postulación, el despacho fue claro en advertir la improcedencia de la suspensión de embargos, es decir, no accediendo a lo peticionado por la ejecutada Porras Téllez, por tanto, necesariamente debe concluirse que, si la ejecutada no se encontraba de acuerdo con la negativa de la suspensión de las medidas cautelares decretadas dentro del presente proceso, debió interponer los recursos respectivos contra las decisiones del mencionado ente judicial, y no realizar nuevas peticiones en el mismo sentido, para que le fueran resueltas nuevamente.

En suma, considera la Sala que, por no haberse presentado el recurso de apelación frente al auto que negó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, con anterioridad a la aceptación del trámite de insolvencia, de fecha 18 de mayo de 2022, esta circunstancia hace extemporánea el recurso de apelación ahora presentado contra la providencia del 30 de agosto de 2022.

Es que de admitirse que el recurso de apelación en este asunto fue presentado oportunamente, dentro del término de ley, sería revivir etapas o términos ya fenecidos referentes a una misma petición; esto es, implicaría dar trámite a una solicitud respecto de un mismo punto que ya obtuvo resolución, para ahí sí, lograr una revisión en segunda instancia.

No obstante, si en gracia de discusión se concluyera que el proveído del 18 de mayo de 2022, no resolvió de fondo lo deprecado por la parte recurrente, el auto del primero de junio de 2022, sí fue expreso al indicar la improcedencia de la cancelación de las cautelas, por la errónea interpretación del artículo 545 del C. General del Proceso, decisión frente a la cual se guardó silencio por la parte interesada.

Bajo estos parámetros, se rechazará de plano el recurso de apelación interpuesto por Rubiela Porras Téllez contra el auto del 30 de agosto de 2022, por medio del cual se resolvió la reiterada solicitud de levantar las medidas cautelares, en aplicación del artículo 545 del C. General del Proceso, por extemporáneo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **INADMITE** el recurso de apelación

interpuesto por RUBIELA PORRAS TÉLLEZ, frente a la decisión del 30 de agosto de 2022, por medio de la cual negó la suspensión y levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del presente asunto, en el interior del proceso Ejecutivo instaurado por FINCA S.A. frente a Sergio Hernando Arciniegas Jiménez, Rubiela Porras Téllez y Laura Juliet Alonso Porras, de acuerdo a lo advertido en la parte motiva.

Comuníquese lo aquí decidido y devuélvase el expediente digital al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, reading "MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO". The signature is stylized, with the first letters of each word being capitalized and prominent.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022